

e-ISSN: 2387-1555

DOI: <https://doi.org/10.14201/rea2023141328>

ENCUENTROS CON EL ESTADO. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, MÉXICO

*Reuniões Com o Estado. Transferências Monetárias
Condicionais Na Serra Norte de Puebla, México*

*Encounters with the State. Conditional Cash Transfers
in the North Sierra of Puebla, Mexico*

María Eugenia D'AUBETERRE BUZNEGO 

Maestría en Antropología Sociocultural, Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
eugeniadaubetterre@gmail.com

María Leticia RIVERMAR PÉREZ 

Maestría en Antropología Sociocultural, Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
rivermar@gmaiil.com

Fecha de recepción: 9 de mayo de 2023

Fecha de aceptación: 2 de agosto de 2023

Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2023

RESUMEN: Abordamos la intervención del Estado mexicano en su función de regular a poblaciones rurales relativamente excedentes en una zona de larga vocación agrícola en la Sierra Norte de Puebla, en el centro del país. Reducida a la condición de «lugar remanente», se especializó desde el último tercio del pasado siglo en la provisión de trabajadores baratos a la economía estadounidense. Identificamos dos momentos clave de esa regulación operando bajo dos formas de hegemonía. Analizamos en particular el encuentro de migrantes retornadas con un Programa

gubernamental de transferencias monetarias condicionadas, modelo de intervención que privilegió la asistencia focalizada sobre el bienestar general. El análisis se fundamenta en información compilada en ambos lados de la frontera entre 2007 y 2014, coyuntura de la Gran Recesión en Estados Unidos.

Palabras clave: Sierra Norte de Puebla; México; Estado y poblaciones relativamente sobrantes; Programa Oportunidades; Mujeres migrantes retornadas.

ABSTRACT: We examine the intervention of the Mexican State in its role of regulating relatively surplus rural populations in an area with a longstanding agricultural vocation in the Sierra Norte de Puebla, in central Mexico. The area, reduced to a status of a «residual place», began specializing in the last third of the last century in the supply of cheap workers to the U.S. economy. We identify two key moments operating under two distinct forms of hegemony. We analyze in particular on the encounter of returnee women with a conditioned government program, an intervention model that favors targeted assistance over general welfare. The analysis is based on information gathered on both sides of the border between 2007 and 2014, in the context of the Great Recession in the United States.

Keywords: Sierra Norte de Puebla; Mexico; State and relatively surplus populations; Women Opportunities Program; Returned migrant women.

RESUMO: Abordamos a intervenção do Estado mexicano na sua função de regular as populações rurais relativamente excedentes em uma área com longa vocação agrícola na Serra Norte de Puebla, no centro do país. Reduzida ao estatuto de «lugar remanescente», especializou-se desde o último terço do século passado em fornecer trabalhadores baratos à economia americana. Identificamos dois momentos-chave desta regulação operando sob duas formas de hegemonia. Analisamos, em particular, o encontro dos migrantes repatriados com um programa governamental de transferências monetárias condicionais, um modelo de intervenção que privilegiou a assistência focada em detrimento do bem-estar geral. A análise baseia-se em informações compiladas em ambos os lados da fronteira entre 2007 e 2014, época da Grande Recessão nos Estados Unidos.

Palavras-chave: Serra Norte de Puebla, México; Populações estaduais e relativamente excedentárias; Programa Oportunidades, Mulheres migrantes retornadas.

I. INTRODUCCIÓN

La noción de lugares remanentes (*remnant places*)¹, propuesta por Sider (2006), nos permite reflexionar sobre el colapso de las condiciones de producción

1 Comunidades y regiones desarticuladas por los efectos de políticas privatizadoras en las que se observa el colapso de las condiciones de reproducción social debido a la incapacidad de seguir

en una zona con una larga tradición agrícola en la Sierra Norte del estado de Puebla, en el centro de México, progresivamente especializada en la exportación de trabajadores a la economía estadounidense, vía una migración acelerada. Entre 1990 y 2000 la PEA ocupada en el sector primario en el municipio de Pahuatlán pasó de 59.2 % a 41.6 %. En el mismo periodo, la PEA en el sector terciario aumentó de 16.9 % a 24.2 %. En suma, una pérdida de importancia relativa de las actividades agropecuarias y un incremento de las actividades ligadas a los servicios y el comercio. A la par, en una muestra de 135 hogares encuestados en la cabecera municipal en 2010, identificamos 76 personas con actual o pasada experiencia migratoria a Estados Unidos, es decir, el 56.3 % de la muestra (D'Aubeterre *et al.*, 2020; D'Aubeterre y Rivermar, 2014). Remesas enviadas por estos trabajadores y transferencias monetarias condicionadas a través de dos programas gubernamentales (PROGRESA y después Oportunidades) se confunden en la reproducción de esta fuerza de trabajo que México transfiere a Estados Unidos, una encarecida mercancía que subsidia procesos de acumulación lejos de esos «lugares remanentes».

En este artículo nos adentramos en uno de los lugares de encuentro de las poblaciones rurales con el Estado para desentrañar algunos de los efectos de sus intervenciones en poblaciones que han devenido relativamente excedentes (Marx, 2009; Li, 2009). En particular, focalizamos nuestra atención en la operación del programa gubernamental de más larga duración durante las últimas décadas en México. Nos referimos a PROGRESA, programa interinstitucional de Transferencias Monetarias Condicionadas puesto en marcha en 1997, orientado a poblaciones de Zonas de Atención Prioritaria, que

[...] pretendía incidir –a través del mejoramiento de la alimentación, la salud y la educación de las familias más pobres del país en la construcción y el fortalecimiento del capital humano para romper el círculo de reproducción intergeneracional de la pobreza [...] [El programa seleccionaba] a las familias beneficiarias a través de criterios técnicos resumidos en indicadores de pobreza y [establecía] como norma y requisito indispensable la corresponsabilidad de los beneficiarios (González, 2009: 13).

Transformado en Oportunidades desde 2002, este programa, inicialmente focalizado en ámbitos rurales, se extendió a pequeñas ciudades y zonas periurbanas, ampliando su cobertura a cinco millones de familias (González, 2009).

No pretendemos evaluar sus resultados en materia de superación de la pobreza y el apuntalamiento de capacidades humanas, diversos especialistas han realizado esa tarea mediante estudios cualitativos y cuantitativos (Escobar, 2000; González de la Rocha, 2009). Por nuestra parte, en este trabajo pensamos este Programa como

produciendo bienes y materias primas para la exportación, orientándose después a la exportación de jóvenes y de su capacidad para trabajar. Criados en esos lugares, pero sin funcionalidad productiva local, esos jóvenes pueden ser aprovechados en lugares distantes, sin que las economías de los países que los absorben asuman los costos de su reproducción y la de sus familias que quedan varados en los lugares remanentes. (Sider, 2006, pp. 249-251).

uno de los dispositivos clave mediante el cual el Estado intervino poblaciones relativamente sobrantes desde 1997, cuando fue puesto en operación bajo el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000). Se inscribe en esa irremontable contradicción en la que, como diría Pierre Bourdieu (2002), el Estado, al retraerse, destruye con una mano condiciones de reproducción que hacían posible la vida de estas poblaciones y con la otra intenta mitigar los efectos perniciosos de esa destrucción desencadenada por la aplicación de políticas de ajuste estructural. Para tal efecto, el Estado adopta como método eficaz de su asistencia la conversión de los nuevos y múltiples beneficiarios en «coejecutores» de esas políticas (Clemente, 2020).

En las siguientes secciones abordamos el accionar del Estado mexicano en una delimitada zona de estudio, sus prácticas, espacialidades y efectos con miras a paliar la debacle del campo y gestionar a las poblaciones rurales que van quedando a la deriva (Li, 2009), «sin función productiva» (Sider, 2006) en el lugar. Adoptamos el concepto de «hegemonía selectiva» de Gavin Smith (2011) y la reflexión de Michael-Rolph Trouillot (2011) sobre las limitaciones de una concepción del Estado pensado como una entidad aislada e impermeable. Asimismo, retomamos la propuesta de Gupta (2015) de hacer «etnografía desde abajo» para develar los encuentros cotidianos de estas poblaciones con el Estado.

Además de la información cuantitativa generada mediante la encuesta a hogares de la cabecera municipal ya referida, entre 2007 y 2014 recabamos información etnográfica sobre la operación del Programa Oportunidades en el municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, situado en las colindancias con el estado de Hidalgo, en el centro de México. Realizamos entrevistas a autoridades locales, operadoras del Programa, maestros y familiares del alumnado de las escuelas de secundaria y de bachillerato de la cabecera municipal, de la localidad otomí de San Pablito Pahuatlán y de las comunidades nahuas de Xolotla y Atla. El objetivo más amplio del proyecto es analizar las condiciones de formación de nuevas clases trabajadoras en el marco de la reorganización global del trabajo en una zona de migración acelerada hacia la costa este estadounidense a mediados de los años 90, en descenso durante la coyuntura de la Gran Recesión de 2007-2009 (D'Aubeterre y Rivermar, 2011; D'Aubeterre *et al.*, 2020).

II. LA «IRRELEVANCIA» O «RETRAIMIENTO» DEL ESTADO NACIONAL. UNA LECTURA CRÍTICA

Uno de los aspectos más debatidos entre los estudiosos de las ciencias sociales hacia principios de los años 90 fue el tema del porvenir de los Estados nacionales en el contexto de la intensa circulación de capitales, mercancías, información y personas, una lectura banal de esta presunta irrelevancia ligada a la llamada «globalización». Se sostuvo que el Estado nacional había dejado de ser ese «contenedor» o «marco» en el que se regularon y administraron relaciones sociales, económicas, político-ideológicas y culturales durante los pasados dos siglos (Pries, 2002). Con el giro hacia un modelo de acumulación flexible (Harvey, 1989) cobró

auge en las ciencias sociales en general y, de manera especial, en la antropología, la idea de la «irrelevancia», el «retraimiento» o el «desdibujamiento» del Estado nacional (Basch *et al.*, 1994).

A contracorriente, una vertiente de la antropología crítica (Gupta, 2015; Carrier y Kalb, 2015; G. Smith, 2011; Trouillot, 2011; Comaroff y Comaroff, 2001) ha subrayado el destacado papel que los Estados continúan desempeñando en la organización de la economía y en la vida de las poblaciones. Suscribimos con esta postura la idea de la persistente relevancia del Estado, a pesar de los cambios en sus intervenciones, prácticas, efectos contradictorios y lugares en los que se despliegan. Es decir, se trataría de una nueva espacialidad del Estado en un momento en el que cedió parte de su poder para incrementar el alcance de su presencia «en sitios antes insospechados» (Trouillot, 2011), más allá de las fronteras nacionales. Trouillot (2011) reconoce la operación de instituciones y organismos estatales y no estatales y multinacionales que actúan de manera combinada. Asimismo, Fraser (2003) identifica multiniveles de gubernamentalidad al reconocer los efectos de estas prácticas en distintas escalas.

Pero no solo han cambiado los espacios de intervención, sino las mismas formas de gestión estatal de las poblaciones. Adoptando la categoría de «hegemonía selectiva» de Gavin Smith (2011), pensamos este proceso como la transición entre un Estado que tutela e interviene de manera sistemática a través de sus diversos aparatos (Althusser, 1968) a un Estado que, al mismo tiempo que cede una parte o abandona algunas de sus funciones, las pone al día, privilegiando a ciertos segmentos de la población. Esta transición ocurre en una coyuntura crítica en la que concurren nuevos antagonismos en el campo de fuerza de un mundo bipolar. G. Smith (2011) ubica dos momentos de la dominación después de la Segunda Guerra Mundial. Durante el primero, domina un proyecto de «hegemonía expansiva»: el Estado funcionaba como regulador de la tensión entre la población (*demós*) y la producción (*tecnos*) a través de un conjunto de políticas económicas y sociales que apuntalaron un consenso social, económico y político. En el último tercio del pasado siglo cambiaron las condiciones económicas y los regímenes para su regulación. Estos cambios fueron nombrados como «neoliberalismo», cuya esencia no es otra que una mutación en la relación entre economía y Estado.

Las políticas estatales de bienestar diseñadas para compensar las avasallantes tendencias de la economía fueron vistas desde entonces como escollos para su libre funcionamiento. La función estatal y de las instituciones que actuaban internacionalmente en la misma dirección fue revertida con vistas a optimizar la acumulación capitalista (G. Smith, 2011, p. 6). En adelante, la facción dominante del bloque histórico, en alianza con el capital financiero transnacional, focalizó su intervención en segmentos específicos de la población. En este segundo momento de la dominación se reformuló la tensión entre población y producción en el marco de un proyecto que Smith denomina «hegemonía selectiva». Desde entonces proliferan en los llamados países periféricos programas dirigidos a la atención a pobres extremos y demás sujetos moldeados por el Estado (mujeres, jóvenes,

grupos étnicos, personas no binarias, discapacitados, etc.) que demandan reconocimiento en el horizonte del multiculturalismo neoliberal (Fraser, 2003). Cabe subrayar que bajo este proyecto la suma de las partes no equivale a una política integral de ciudadanía universal (G. Smith, 2011, p. 6).

En el caso que nos ocupa, podemos pensar que, bajo el proyecto de hegemonía expansiva, amplios sectores de la población rural mexicana funcionaron como poblaciones relativamente sobrantes en su forma intermitente y latente (Marx, 2009; J. L. Smith, 2014; Brass, 1994), estacionados en sus comunidades, empleándose en actividades agrícolas y desplazándose pendularmente dentro o fuera del país en búsqueda de empleo. Esta dinámica apuntaló la industrialización de México bajo el paraguas de los modelos de sustitución de importaciones y de desarrollo estabilizador, que cobraron expresiones particulares a nivel regional. Asimismo, durante esta fase se pusieron en marcha políticas que sentaron las bases para un Estado social, aunque raquíto y, sobre todo, efímero (Otero, 2013).

Cabe acordar con Clemente (2020) que el modelo «bienestarista» en los países con mayor desarrollo relativo de América Latina comprendía tanto la ayuda como el seguro social, extendiendo la base contributiva hacia sectores que potencialmente podían o no integrarse al mercado de trabajo. Las «nuevas políticas sociales» operaron bajo la idea de que la pobreza desencadenada en el marco de las reformas estructurales de los años 80 era transitoria y solo afectaba «[...] gravemente a sectores vulnerables, de ahí la necesidad de constituirlos en el foco de la política social mientras duraran las políticas de ajuste» (Clemente, 2020: 329). A juicio de Clemente (2020), se transitó hacia un modelo que pondera la asistencia («neoaasistencialismo») sobre la seguridad social.

III. EFECTOS DE DOS PROYECTOS DE DOMINACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO

En el siglo XVI se introdujo el cultivo de la caña de azúcar en la Sierra Noroccidental del estado de Puebla, México. A mediados del XIX esta producción dominaba la economía política del municipio de Pahuatlán, mientras que el café ganaba terreno como un prometedor, aunque siempre riesgoso cultivo patrocinado por inmigrantes europeos. Los distintos sectores que confluyeron en la producción de caña y en la transformación de sus derivados participaban como peones, pequeños productores, intermediarios, acaparadores, arrieros, comerciantes y operarios de pequeños talleres de manufactura que daban soporte al proceso productivo (fraguas, curtidurías, talabarterías, rastros). Estos sectores constituyen los componentes de una formación que se consolidó con el tránsito de la producción artesanal y la comercialización de piloncillo y aguardiente allende el lugar para abastecer a emprendimientos productivos, en especial zonas mineras del Altiplano hidalguense y destilerías de la Ciudad de México.

En los testimonios y experiencias de envejecidos campesinos, trabajadores y trabajadoras de la región, que rondaban los 80 años de edad cuando iniciamos

nuestras indagaciones en el lugar, descubrimos expresiones de un proyecto de hegemonía expansiva (G. Smith, 2011) manifiesto en la gestión estatal de estas poblaciones rurales entre los años 40 y 70 del pasado siglo. En esas décadas emergieron flujos migratorios que conectaban la Sierra Norte de Puebla con zonas donde se concentraba el capital: la ciudad de Tulancingo y Ciudad Sahagún –en el vecino estado de Hidalgo–, la Zona Metropolitana de la capital del país y regiones de agricultura intensiva en las tierras bajas colindantes con el estado de Veracruz. La población relativamente excedente de este municipio, a veces sin función productiva local, apuntaló procesos de acumulación mediante la provisión intermitente de trabajo barato al llamado «sector moderno». Su incorporación al trabajo fabril tradujo, desde luego, su subordinación al capital y para algunos acumular experiencias en la vida sindical.

A la par, en una escala geográfica más amplia, la movilidad de poblaciones de este municipio, como en el resto del país, respondió a la demanda de fuerza de trabajo en la agricultura del sur oeste estadounidense en el marco regulatorio del Programa Bracero. Este convenio, firmado entre México y Estados Unidos, entró en operación en 1942 en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta 1964 con una serie de adecuaciones (Durand y Massey, 2003). Bajo un patrón de reclutamiento y desplazamiento que evoca la movilidad de los ejércitos, jóvenes mestizos de este municipio serrano del centro de México fueron parte de las cuotas de trabajo transferidas temporalmente a la economía estadounidense a través de la mediación estatal.

Este acuerdo binacional operó en el contexto del modelo de acumulación fordista donde el protagonista clave de la producción era el varón, jefe de familia, reconocido como proveedor y encargado de asegurar el bienestar de sus dependientes. Bajo este modelo, presuntamente mujeres e hijos tendrían acceso al bienestar vía su relación con el proveedor. Recordemos con Fraser (1997) el interesante debate suscitado en torno a la idea del «salario familiar», que apuntaló un ideal de vida doméstica que, cabe reconocer, se consolidó solo entre delgadas capas de la clase trabajadora. En la letra del acuerdo migratorio se prometían beneficios de los ahorros de ese trabajador agrícola disciplinado por el Programa Bracero. Promesa a la postre fallida que sigue alentando las esperanzas de los herederos de ese proletariado, reconocible en los ecos lejanos de un modelo de trabajador con derecho a una pensión para el retiro y, al mismo tiempo, «no libre» en su condición de «trabajador perfecto²» (Hahamovitch, 2014).

2 A través del rediseño de las políticas migratorias por más de un siglo, el régimen migratorio estadounidense ha contenido en algunos momentos el flujo de inmigrantes y, en otros, ha regulado selectivamente el ingreso de migrantes «legales» e «ilegales». Lo que distingue al trabajador perfecto es su sujeción en un marco regulatorio que le impide «decidir libremente a quién vende su fuerza de trabajo», es decir, una movilidad constreñida por esa regulación. (Hahamovitch, 2014).

Entre los años 70 y 80, ya en el desfonde del proyecto de hegemonía expansiva, cabe referir la importancia de la operación de dos programas estatales de desarrollo rural en la zona de estudio. A inicios de los años 70 el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) alentó la producción intensiva de artesanías. Esta actividad subsidió a una agricultura poco productiva, destinada a la reproducción del grupo familiar (Novelo, 1976: 40). En el municipio de Pahuatlán la intervención del FONART privilegió a las localidades indígenas nahuas y otomí. Debido a esta acción, bienes de consumo cotidiano (prendas de vestir y objetos rituales) mudaron rápidamente de valores de uso a mercancías. Las pequeñas unidades de producción y comercialización artesanal se configuraron como nuevos sitios desde donde, como hasta hoy, se desencadenan flujos de valor lejos de los productores (D'Aubeterre y Rivermar, 2019). A su vez, entre 1978 y 1989 se apuntaló la caficultura a través del Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), que ofreció asistencia técnica, apoyo para la comercialización del grano y créditos a bajos intereses a productores minifundistas, en su mayoría indígenas. Con ello se promovió la especialización en un monocultivo comercial y el progresivo abandono de la producción de básicos (maíz, frijol, chile, cacahuete, frutales, incluso de la caña de azúcar) (Galiniér, 1987).

En suma, durante el último tramo de la fase de hegemonía expansiva del Estado mexicano se forjó al sujeto artesano, custodio de una herencia cultural ancestral (Novelo, 1976) y, simultáneamente, a un pequeño productor volcado a un cultivo «planetario» (Trouillot, 2011) de alto valor comercial que, al amparo de la «caficultura social» (Macip, 2005), fue reconocido como sujeto de crédito, asistencia técnica y subsidios (D'Aubeterre y Rivermar, 2014). En el municipio de estudio advertimos un giro en los años 80 de este régimen regulatorio en el marco de una nueva tensión entre Estado y economía acorde con las tendencias globales desreguladoras orientadas al relanzamiento del capitalismo después de la aguda crisis de los años 70.

A fines de esa década aumentó la migración mexicana a Estados Unidos, involucrando incluso a poblaciones de zonas de agricultura minifundista del centro y sur del país (Durand y Massey, 2003). La incrementada demanda de trabajo barato y la relocalización de capitales desencadenaron corrientes migratorias hacia nuevos destinos en la unión americana. Desde esos años se consolidaron en Pahuatlán flujos irregularizados, más heterogéneos en términos de su composición sociodemográfica (de género, edad y pertenencia étnica), pero más acotados por la rigidez de la frontera. En la localidad otomí de San Pablito se originó el flujo hacia el Nuevo *New South*³ (Mohl, 2003) a resultas de un «contagio» con una migración más añeja de indígenas otomíes del vecino estado de Hidalgo. En sucesivos

3 Es un vasto territorio, una de las regiones más globalizadas del planeta, conformada por once estados de la unión americana: Carolina del Norte, Arkansas, Georgia, Tennessee, Carolina del Sur, Alabama, Kentucky, Mississippi, Virginia, Florida, Texas y Luisiana.

años esta migración se irradió a todo el territorio municipal, incrementándose el 50 % en el periodo de 1995-1998. Constituyó una sostenida transferencia de trabajo vital para la recuperación de la desindustrializada economía del sur y la costa este de Estados Unidos. Bajo viejos y nuevos esquemas de movilidad se desplazaron hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría solteros, que valorizaron el capital en el reconvertido Nuevo *New South*. Hasta hoy, quienes no pueden sumarse a estos flujos (ancianos, enfermos, discapacitados, mujeres, niños y, eventualmente, migrantes retornados) integran la categoría de «vulnerables», «pobres extremos», blanco de las nuevas intervenciones del Estado mexicano que administran y gestionan sus vidas.

La discusión en la que aquí apenas incursionamos da cuenta de las condiciones que los migrantes retornados encaran al intentar su reinserción al trabajo, la educación y los servicios de salud. Woo y Flores (2015: 29), con base en el Censo de Población y Vivienda de 2010, señalan que la mayor parte de los migrantes retornados regresan a localidades de menos de 15.000 habitantes, lo que condiciona de manera indiscutible el logro de ese propósito y obliga a algunos a re-emigrar a Estados Unidos o a mudarse a ciudades mexicanas. En Pahuatlán observamos que es muy probable la re-emigración de aquellos que procrearon hijos en aquel país. Aunque el desempleo y el subempleo, así como el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses favorecieron el retorno a Pahuatlán en los años siguientes a la Gran Recesión, eso no canceló las trayectorias migratorias desplegadas aceleradamente en los años 90 (D'Aubeterre *et al.*, 2020, pp. 119-120).

IV. OPORTUNIDADES. LOS SUBSIDIOS A LA POBREZA

Bajo el proyecto de hegemonía selectiva (G. Smith, 2011) se configuran nuevos sujetos definidos por atributos esencializados de género, raza, etnicidad, edad, discapacidad, interpelados y reconocidos en su diversidad, alentados para sacar provecho de sus diferencias promovidas como «ventajas comparativas». En este marco regulatorio que configura una nueva relación entre individuos singulares y el Estado, a veces las poblaciones son interpeladas como pobres extremos –siempre sospechosos de dilapidar o de recibir inmerecidamente la cobertura de los recursos públicos– otras, como emprendedores capaces de salir de su lastimosa condición con denodado esfuerzo.

En México el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) fue quizás una de las expresiones más conspicuas de la nueva fase de dominación de hegemonía selectiva. PROGRESA compartía la arquitectura de programas similares adoptados en Latinoamérica y el Caribe en esa coyuntura. Todos fueron concebidos como «instrumentos de combate de la pobreza y la pobreza extrema», tal como lo afirmaban sus principios. Los también llamados Programas de Transferencias con Corresponsabilidad (PTC) operaban a inicios de la primera década del milenio en 18 países de la región, atendiendo a 25 millones de familias, que representaban

entonces el 19 % de la población, con un costo del 0.4 % del PIB regional (Cecchini y Madariaga, 2011). Estos programas se jactaban de haber integrado en su operación una perspectiva de género.

Como titulares de PROGRESA, las madres fueron co-responsabilizadas en el logro de las metas propuestas: «proporcionar salud, alimentación y educación, superar la pobreza y apuntalar capacidades humanas». Este programa condicionaba las transferencias monetarias a la asistencia de niños y niñas a la escuela, a revisiones médicas periódicas y a talleres informales educativos. Las madres también fueron involucradas en la consecución del bienestar comunitario (faenas de limpieza de calles, remozamiento de escuelas). Diversas especialistas (González, 2009; Sesia, 2001) advirtieron que, paradójicamente, las excesivas cargas de trabajo y tiempo dedicados a esas tareas revirtieron posibles avances en materia de equidad de género. Una súper-especialización que confirmaba a las mujeres como cuidadoras de tiempo completo. Éxitos y fracasos son imputables a la dedicación y el empeño de las madres. Al referirse a la operación de estos programas, Molyneux (2006) calificó perspicazmente a las beneficiarias como «madres al servicio de la nueva agenda antipobreza». Otra faceta, quizá la más virtuosa de PROGRESA y Oportunidades, fue el propósito de «empoderar» a las niñas dotándolas de becas ligeramente más altas que las de los varones para reconocer su esfuerzo, es decir, una política de discriminación positiva que pretendía contener el abandono escolar y la añeja marginación de las niñas del sistema educativo.

En 1997 la comunidad otomí de San Pablito Pahuatlán figuraba entre las localidades de alta y muy alta marginación a nivel nacional. Por ello, fue seleccionada en agosto de ese año entre las primeras donde se puso en marcha PROGRESA. Bajo el amparo de este programa, sus habitantes dejaron de ser intervenidos como campesinos o artesanos. Cuando PROGRESA inauguró sus operaciones en San Pablito Pahuatlán, esta localidad se iba consolidando como la mayor receptora de remesas enviadas desde Estados Unidos en el municipio de estudio (D'Aubeterre y Ayala, 2011). Efecto paradójico, sin duda, que ha sido observado en otras zonas de intensa migración y que ha llevado a postular que serían los hogares receptores de remesas los que, eventualmente, dispondrían de mayor tiempo y recursos para destinarlos al cumplimiento de las tareas y rutinas a las que obligaba el Programa (Banegas *et al.*, 2021). En San Pablito la producción artesanal y las transferencias monetarias condicionadas retenían en esos años a hombres y mujeres de mayor edad y a mujeres jefas de familia con hijos en edad escolar que eran el foco de estos programas y niños y adolescentes beneficiarios de becas que, a la espera de sumarse a los que ya habían migrado al Nuevo *New South*, se entrenaban en el oficio artesanal.

Cabe advertir también la feminización de la misma operación del Programa Oportunidades, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Encabezaba el organigrama la figura de «enlace», bisagra entre el Estado y la población beneficiaria. Subordinadas a ella estaban «las operadoras locales». En 2012, Paula, una joven mestiza madre de dos hijos, con estudios inconclusos de bachillerato, ella

misma migrante al norte años atrás, se desempeñaba como enlace. Las operadoras locales reclutadas en los pueblos recibían retribuciones exiguas a cambio de su trabajo y, como a cualquier trabajador precario, se les exigía plena disponibilidad. Tenían a su cargo las campañas de promoción de la salud y una sana alimentación, la organización de reuniones, el levantamiento de censos; en fin, tareas que generaban información estratégica para el Estado a muy bajo costo. En los hechos ellas eran, como diría Gupta (2015), «la cara» del Estado frente a la población demandante; por ello, pequeñas negociaciones y rencillas anidaban entre las beneficiarias y estas operadoras. Además, asoma este rostro en las tareas de profesores y personal de salud en general, mediadores en su función de convalidar el desempeño de las madres. Y, como en un juego de espejos, las mismas madres transformadas en vigilantes unas de otras. En suma, se trataba de un complejo andamiaje de disciplinamiento.

Más allá de las metas alcanzadas en materia de salud, alimentación y educación, el uso clientelar de los recursos asignados con fines partidistas ha sido señalado en más de una ocasión como un efecto colateral de estos programas que no se puede subestimar (Ayala, 2016; Sesia, 2001). Al supervisar «el uso correcto» de los recursos, las decisiones de las operadoras sancionaban la inclusión o exclusión de las madres en ese Programa. En su doble papel, como integrantes de la comunidad y gestoras gubernamentales, las operadoras no podían desmarcarse de afinidades y preferencias personales. Sobre estas funcionarias *sui generis* del Estado recaían la animadversión y la hostilidad y la sempiterna sospecha de corrupción con frecuencia inmerecidas.

Según información proporcionada por Paula, alrededor de 3.400 familias del municipio recibían algún apoyo de Oportunidades en 2012. Lastimosamente, Paula compartía la generalizada desconfianza hacia las beneficiarias del Programa, prejuicios que pudimos identificar tanto entre las elites locales (comerciantes, funcionarios, maestros), como entre familias de trabajadores del lugar. La funcionaria sostenía que una parte de las receptoras no merecían recibir las transferencias porque poseían otros recursos, a su parecer «no eran realmente pobres». Desde su punto de vista, muchas beneficiarias eran abusivas y ávidas de un dinero que, a su juicio, otros necesitaban más.

Veo que hay mucha gente que no tendrá mucho dinero, pero tienen una posición media. Sin embargo, venían pidiendo el Programa. Yo les decía: «a ver, seamos conscientes, hay gente de muy escasos recursos, que realmente lo necesita. Ustedes a lo mejor tienen otra entrada, tienen una fondita, les manda [remesas] su hijo». Pero no, la gente busca y busca el Programa, porque dicen: «ahora ya ningún dinero alcanza» (Paula, Pahuatlán de Valle, junio de 2012).

Particularmente se veían afectadas por ese prejuicio las madres que habían regresado de Carolina del Norte en los años de la Gran Recesión (2007-2009), con hijos en edad escolar nacidos en Estados Unidos o llevados a ese país a edades tempranas, que intentaban insertarlos en el sistema escolar local y tramitar los

beneficios del Programa. Entre las madres retornadas abundaban las quejas por las complicadas y costosas trabas burocráticas. Hacia ellas especialmente se orientaba la sospecha de hacer un uso abusivo de algo que, más que un derecho, las funcionarias a cargo del Programa solían percibir como una prebenda.

Lo aquí referido no es exclusivo de este municipio, otros estudios lo han documentado en diversas latitudes del país. Los hallazgos de Banegas *et al.* (2021, p. 446) refieren las dificultades que entraña para los migrantes de retorno la renegociación de sus derechos para poder participar de los servicios y programas que les garantiza la ley federal «[...] debido a omisiones simples en normas vigentes, y a menudo por las actitudes anti inmigrantes de las autoridades locales y proveedores de servicios». Imposible que estas mujeres lograran advertir en sus «encuentros» con la enlace, maestros, médicos y otros funcionarios los efectos locales de las condiciones supranacionales de políticas públicas y presupuestales que influyen en el financiamiento, los niveles, las poblaciones «merecedoras», la duración de estos programas, etc. Tal como afirma Akil Gupta (2015: 95), lo que sucede en las comunidades está complejamente mediado a veces por enlaces múltiples, otras de manera más directa por esos vínculos. En suma, «[...] el análisis detallado de la vida cotidiana está sobre determinado por influencias transnacionales», frecuentemente consensos entre bloques económicos, agencias de desarrollo y bancos que alientan ciertas políticas o desalientan otras que, sostenemos, es necesario descubrir mediante una etnografía histórica (G. Smith, 2011).

Pero regresemos a Paula. Como muchos, ella estimaba que las madres que realmente necesitaban los recursos los malgastaban consumiendo bienes superfluos.

Les digo [a las señoras] que cuiden el recurso que les llega, «porque el día que reciben el apoyo, para ustedes es un día de plaza». Se llena de puestos de comerciantes aquí [en la cabecera], en los pueblos de Xolotla, Atla, San Pablito. Y las señoras lo primero que hacen es que van y compran lo innecesario: cazuelas, ollas, películas. Además, llegan el de los préstamos, el de Avon, la señora que vende joyas de oro, todos, todos a los que les deben. Entonces, la gente lo que hace es repartir el dinero del Programa. Les digo que pasen a la tienda y se lleven una caja de leche, una caja, no un litro, que compren fruta, que compren verdura. Que compren lo que dice el Programa.

En el marco de políticas de reconocimiento que dominan en esta fase de hegemonía selectiva, en los hechos se fragmenta a la población, en este caso, entre «merecedores» y «no merecedores». Atendiendo a la distinción analítica propuesta por Fraser (1997) entre políticas de redistribución y políticas de reconocimiento y su necesario entrelazamiento en materia de justicia, sostenemos que estos programas de asistencia focalizada desplazaron la tensión entre población y economía hacia la división y la hostilidad entre las facciones empleadas y desempleadas de las clases trabajadoras. Así, las mujeres rurales súper especializadas en los circuitos de reproducción social (Fraser, 2017; Bhattacharya, 2017) quedan marcadas como inherentemente deficientes e insaciables beneficiarias de una generosidad inmerecida (D'Aubeterre, 2013).

Sin embargo, cabe advertir que las madres trabajadoras despliegan «luchas inmediatas» (Narotzky y Smith, 2006) en Estados Unidos al reclamar la inclusión ciudadana de sus hijos, para removerlos de esa zona de penumbra en la que los coloca la ilegalización. Al regresar a México, despliegan experiencias de lucha acumuladas, si no en el ámbito de la producción (sindicatos, organizaciones políticas de trabajadores migrantes), sí en los circuitos de reproducción (escuelas, sanidad pública, acceso a espacios formativos fuera de las aulas, etc.). Son luchas donde se redefinen cotidianamente las fronteras entre producción y reproducción y que, a decir de Nancy Fraser (2017: 25), son tan fundamentales en las sociedades capitalistas contemporáneas como las luchas de clase analizadas por Marx.

V. A MANERA DE CIERRE

Bajo el proyecto de hegemonía selectiva amplias franjas de la población del México rural fueron configurándose durante sucesivas generaciones como poblaciones relativamente sobrantes en sus lugares de origen, pero aprovechables por sus capacidades para valorizar el capital en otras latitudes dentro y fuera del país. Por su parte, la superpoblación excedente, aquella que no contribuye al logro de la reproducción ampliada del capital y que ha sido «despojada» (Harvey, 1989; Li, 2009), estancada o en condición de pauperismo se convirtió en blanco privilegiado de intervenciones selectivas en esos «lugares remanentes» (Sider, 2006). Cabe reconocer en los «encuentros» cotidianos de poblaciones rurales con el Estado la articulación de producción y reproducción social en el moldeamiento de las experiencias de estos trabajadores y trabajadoras globalizados, estacionados temporalmente en el terreno a su regreso de Estados Unidos.

En otros trabajos (D'Aubeterre y Rivermar, 2021: 19; D'Aubeterre *et al.*, 2020) hemos aludido al encarecimiento de la fuerza de trabajo transferida a la economía estadounidense. Aquí subrayamos nuevamente que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de los medios de subsistencia y cuidados desplegados en su reproducción tanto en los hogares como en otros circuitos de reproducción. En tanto que ni el Estado, ni los empleadores en el lugar de destino asumen la reproducción de los trabajadores migrantes ilegalizados ni de sus hogares, el capital la transfiere a las familias de estos trabajadores y a diversos circuitos de reproducción (hospitales, escuelas, infraestructura y servicios públicos) en sus lugares de origen, donde convergen el Estado y otros actores en la función de sostener la vida, es decir, de producir personas en toda su complejidad (Bhattacharya, 2017; Fraser, 2017; Narotsky, 2006; Cravey, 2003). Al analizar la operación de programas de transferencias monetarias condicionadas en Pahuatlán, identificamos una expresión poco reconocida del cuantioso subsidio de México a la economía estadounidense (Delgado *et al.*, 2009).

VI. BIBLIOGRAFÍA

- Althusser, L. (1968). «Ideología y aparatos ideológicos del Estado». En *La filosofía como arma de la revolución* (pp. 102-151). México: Siglo XXI.
- Ayala Galí, E. (2016). *Los retos de la política social en México. Combate a la pobreza y equidad de género*. México: BUAP, ICSyH.
- Banegas, I., Teruel, G. y Escobar Latapí, A. (2021). «Los programas y servicios sociales mexicanos y la migración de ida y vuelta». En A. Escobar y C. Masferrer (coords.), *La década en que cambió la migración: enfoque binacional del bienestar de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y México* (s. p.). México: COLMEX, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, CIESAS.
- Bhattacharya, T. (2017). «How not to skip class: Social reproduction of labor and the global working class». En T. Bhattacharya (Ed.), *Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression* (pp. 68-93). London: Pluto Press.
- Basch, L., Glick Schiller, N. y Szanton Blanc, C. (1994). *Nations Unbound Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States*. London: Routledge.
- Bourdieu, Pierre. 2002 (1994). *Razones prácticas*. Barcelona: Anagrama.
- Brass, Tom. (1994). «Some Observations on Unfree Labour, Capitalist Restructuring, and Deproletarianization». *International Review of Social History*, 39: 255-275.
- Carrier, J. G. y Kalb, D. (eds.). (2015). *Anthropologies of Class. Power, Practice and Inequality*. Cambridge: University Press.
- Cecchini, S. y Madariaga, A. (2011). *Programas de transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, Asdi
- Clemente, A. 2020. «El neosistencialismo como propuesta y límite al bienestar». *Ser Social*, 47: 317-338.
- Comaroff, J. y Comaroff, J. L. (2001). «Millennial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming». En J. Comaroff y J. L. Comaroff (eds.), *Millennial Capitalism and the Culture of Neoliberalism*, (pp. 1-56). Durham & London: Duke University Press.
- Cravey, A. J. (2003). «Toque una Ranchera, por favor». *Antipode*, 35(3): 603-621.
- D'Aubeterre Buznego, M. E. (2013). «Reestructuración neoliberal, migración a Estados Unidos y reorganización familiar en una zona cafetalera del centro de México». *Revista Márgenes, Espacio, Arte, Sociedad*, 13(10): 22-31.
- D'Aubeterre Buznego, M. E. y Rivermar Pérez, M. L. (2021). «Trabajadores otomíes de la Sierra Norte de Puebla, México, en la agroindustria del Nuevo *New South* estadounidense». *Relaer*, 6, 12. <http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25251635/c7skljuh6>.
- D'Aubeterre Buznego, M. E., Lee, A. E. y Rivermar Pérez, M. L. (2020). *Class, Gender and Migration. Return Flows Between Mexico and The United States in Times of Crisis*. London: Routledge.
- D'Aubeterre Buznego, M. E. y Rivermar Pérez, M. L. (2019). «Movilidades y cadenas de valor en una localidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, México». *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 63: 55-73.
- D'Aubeterre Buznego, M. E. y Rivermar Pérez, M. L. (2014). «From Amate Paper Making to Global Work: Otomí Migration from Puebla to North Carolina». *Latin American Perspectives*, 41(3): 118-136.

- D'Aubeterre Buznego, M. E. y Rivermar Pérez, M. L. (coords.). (2014). *¿Todos vuelven? Migración acelerada, crisis de la economía estadounidense y retorno en cuatro localidades del estado de Puebla, México*. México: BUAP, ICSYH.
- D'Aubeterre Buznego, M. E. y Rivermar Pérez, M. L. (eds.). (2011). *Migraciones en la huasteca poblana. Actores y procesos*. México: BUAP, ICSYH.
- D'Aubeterre Buznego, M. E. y Ayala Gali, E. (2011). «Migración, producción artesanal y subsidios a la pobreza». En D'Aubeterre, M. E. y Rivermar, M. L. (eds.), *Migraciones en la huasteca poblana. Actores y procesos*, (pp. 93-115). México: BUAP, ICSYH.
- Delgado Wise, R., Márquez Covarrubias, H. y Rodríguez Ramírez, H. (2009). «Seis tesis para desmitificar el nexo entre migración y desarrollo». *Migración y Desarrollo*, 12: 27-32.
- Durand, J. y Massey, D. (2003). *Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI*. México: Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa.
- Escobar Latapí, A. (2000). «PROGRESA y cambio social en el campo mexicano». En E. Valencia, M. Gendrau, y M. Tipichin (coords.). *Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza?*, (pp. 257-282). México: Universidad de Guadalajara, ITESO, Universidad Iberoamericana Puebla.
- Fraser, N. (2017). «Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions of Contemporary Capitalism». En Bhattacharya, T. (ed.), *Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression* (pp. 21-36). London: Pluto Press.
- Fraser, N. (2003). «¿De la disciplina hacia la flexibilización? Releyendo a Foucault bajo la sombra de la globalización». *Revista de Ciencias Políticas y Sociales* 46(87): 15-33.
- Fraser, N. (1997). *Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postcolonialista*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Uniandes.
- Galinier, J. (1987). *Pueblos de la Sierra Madre: Etnografía de la comunidad otomí*. México: Instituto Nacional Indigenista.
- González de la Rocha, M. (2009). «Introducción». En González de la M. Rocha (coord.), *Procesos domésticos y vulnerabilidad. Perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades*, (pp. 11-43). México: Publicaciones de la Casa Chata, Oportunidades, Vivir Mejor.
- Gupta, A. (2015). «Fronteras borrosas: el discurso de la corrupción, la cultura de la política y el Estado imaginado». En P. Abrams, A. Gupta y T. Michell (coords.), *Antropología del Estado* (pp. 71-146). México: Fondo de Cultura Económica.
- Hahamovitch, C. (2014). *No man's land: Jamaican guest workers in America and the global history of deportable labor*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Harvey, D. (1989). *The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change*. Oxford: Blackwell.
- Li, T. M. (2009). «To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations». *Antipode*, 41(S1), pp. 66-93.
- Macip, R. F. (2005). *Somos un país de peones: café, crisis y estado neoliberal en el centro de Veracruz*. México: ICSYH / BUAP.
- Marx, K. (2009). *El Capital. Crítica de la economía política*, Tomo I. México: Fondo de Cultura Económica.
- Mohl, Raymon. (2003). Globalization, Latinization, and the Nuevo New South. *Journal of American Ethnic History*, 22(4): 31-66.
- Molyneux, M. (2006). «Mothers at the Service of the New Poverty Agenda: Progres/ Oportunidades, México's Conditional Transfer Program». *Social Policy & Administration*, 40(4) 425-449.

- Narotzky, S. y Smith, G. (2006). *Immediate Struggles: People, Power and Places in Rural Society*. Berkeley: University of California Press.
- Novelo, V. (1976). *Artesanías y capitalismo en México*. México: CISINAH, SEP.
- Otero, G. (2011). Neoliberal globalization, NAFTA, and migration: Mexico's loss of food and labor sovereignty. *Journal of Poverty* 15(4): 384-402.
- Pries, L. (2002). «La migración transnacional y la perforación de los contenedores de Estados-nación». *Estudios Demográficos y Urbanos*, 17(3): (51): 571-597.
- Sesia, P. (2001). «Aquí la Progresista está muy dura»: Estado, negociación e identidad entre familias indígenas rurales». *Desacatos*, núm. 8: 109-128.
- Sider, G. (2006). «The production of Race, Locality, and State: An Anthropology. *Anthropologica*, 48(2): 247-263.
- Smith, G. A. (2011). «Selective Hegemony and Beyond Population with «No Productive Function»: A Framework for Enquiry». *Identities Global Studies in Culture and Power*, 18(1): 2-38.
- Smith, J. L. (2014). «Deproletarianization in the Peri-Urban Interface: Transforming Labor Relations in Polokwane, South Africa. *Human Geography*», 7(3): 44-59. <https://doi.org/10.1177/194277861400700304>.
- Trouillot, M.-R. (2011). *Transformaciones globales. La antropología y el mundo moderno*. Colombia: Universidad del Cauca, CESO-Universidad de los Andes.